**VII. Desempeño institucional**

**c) Pasivos contingentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. PASIVO LABORAL | NÚMERO | MONTO |
| I.I Juicios Laborales | 5 | **$8,844,087.02**  Este importe puede ser susceptible de afectación en atención a las atenuantes que señalen las autoridades laborales. |
| 1. Pendientes de cumplimentar | 1 | Laudo condena: **$2,678,374.41** más los incrementos salariales a la fecha de reinstalación. Dicho importe no contempla impuestos.  Monto al 30 de junio de 2022: **$3,757,674.47** |
| 1. Incidente de liquidación | 0 |  |
| 1. Pagos depositados en cumplimiento a laudos, en espera de que se acuerde por la autoridad competente que han quedado concluidos y orden de su archivo | 0 |  |
| 1. En Proceso | 5 | **$5,086,412.55**  Este importe puede ser susceptible de afectación en atención a las atenuantes que señalen las autoridades laborales. |
| 1. Procesos (civiles, mercantiles y administrativos) | 1 | **$ 662,592.00**  Juicio Contencioso Administrativo a través del cual Grupo ATS Seguridad Empresarial, S.A. de C.V. demanda la nulidad de la resolución administrativa a través de la cual ECOSUR rescindió el contrato número 91E-F-S-SCLC-002/2020 de fecha 13 de diciembre de 2019 que tenía celebrado con esta empresa para servicios de aseo, limpieza y jardinería.  Dicho de otra manera, en el juicio se determinará si el procedimiento de rescisión es definitivo.  **Etapa:** Sustanciación, durante el mes de diciembre se desahogaron diligencias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la finalidad de preparar el desahogo de pruebas en este juicio y para dar contestación a los conceptos de impugnación planteados por la empresa.  En el mes de enero 2021, los peritos de ambas partes comparecieron a aceptar su cargo. Por parte de Ecosur, se ha rendido ya el dictamen pericial en grafoscopía.  Mediante acuerdo de 9 de julio de 2021, se informa que el IMSS ha desahogado el requerimiento para determinar si las personas señaladas en el escrito inicial de demanda se encuentran inscritos ante tal organismo. Mediante acuerdo de 12 de julio de 2021, la Sala Regional Península solicitó apoyo a la Sala Regional de Chiapas para llevar a cabo las gestiones correspondientes para el desahogo de la prueba testimonial. Actualmente se llevan a cabo las diligencias para el perfeccionamiento de esta prueba. |

**Asesor Externo responsable del seguimiento y defensa de estos juicios: Mtro. en Der. Sergio Rubén Gonzalez Flores**

**Consideraciones:** Los pasivos no se reflejan en los estados financieros; sin embargo, en las notas del informe de auditoría de los estados financieros dictaminados se encuentra información a los pasivos contingentes. En este sentido:

**1. Verónica Marina Alarcón Estrada (578/2010)**, laudo de fecha 24 de enero del 2020, mediante el cual se condena a la reinstalación y el pago de sueldos y diversas prestaciones, dando un cálculo aproximado de $2,678,374.41 (Dos millones seiscientos setenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 41/100M.N.). Mediante sesión del 21 de octubre de 2020, se emitió sentencia para dejar sin efectos el laudo de fecha 24 de enero de 2020. La Junta emite un nuevo laudo en ejecutoria de la sentencia de amparo, el de fecha 4 de febrero de 2021. El 8 de marzo del 2021, se notifica que la parte actora interpuso nuevamente un amparo contra este nuevo laudo, Ecosur interpone amparo en la vía adhesiva. El amparo fue resuelto mediante sentencia del 18 de junio de 2021, no amparando a la quejosa. De esta forma el laudo de fecha 4 de febrero de 2021, es firme. Se ha solicitado a la Junta que determine lugar y hora para la reinstalación, y proceder al pago del laudo, se encuentra en trámite la promoción. **Se están llevando a cabo las gestiones correspondientes para la reinstalación y liquidación del laudo e interposición de amparo directo, para evitar mayores dilataciones, a la fecha del 30 de junio de 2022, se contabiliza un aproximado de $3,757,674.47 (Tres millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), los cuales quedaran firmes hasta la ejecución del laudo y valoración de la autoridad.**

**2. Obeimar Balente Herrera Hernández (292/2018)**, con base al análisis de las documentales, se hace un cálculo aproximado **de $219,755.55 (Dos cientos diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N.).** Derivado del incidente de competencia, la Junta Especial señaló que actualmente está integrando las actuaciones para remitirlas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este sentido una vez radicado esta instancia, se apersonaran los abogados ante la instancia correspondiente para tener personalidad jurídica en el asunto. **Es importante referir que este asunto al remitirse a un Tribunal distinto propiamente ya no constituye un expediente en materia laboral.**

**3.** **Aaron Jarquín Sánchez y otros (808/2016)**, con base al análisis de las documentales, se hace un cálculo aproximado de $**1,600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),** el monto señalado debe actualizarse con base al porcentaje de aportación de los trabajadores al pago de las pólizas de la aseguradora de los ejercicios fiscales 2016 a la fecha. El expediente se encuentra en el desahogo de pruebas y alegatos del incidente de competencia que presentó un tercero llamado a juicio.

**4. Ada Jiménez Roblero y otros (522/2018),** con base al análisis de las documentales, se hace un cálculo aproximado de **$2,932,000.00 (Dos millones novecientos treinta y dos mil pesos 00/100M.N.)** por cada año reclamado, actualmente se consideraron los años 2017 y 2018, esto de conformidad a la demanda. El 25 de febrero de 2022 a las 10 am, se ha fijo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; sin embargo, esta audiencia se difirió para el 25 de agosto de 2022 a las 10 am debido a que la Junta Especial determinó regularizar el procedimiento laboral, teniéndose por terceros llamados a juicio a: 1) SHCP a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Dirección General Adjunta Técnica de Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos; 2) ISSSTE; 3) CONACYT; y 4) SFP.

Cabe señalar que, de acuerdo con la demanda, este importe corresponde al reclamo del pago de conceptos que a decir de los demandantes fueron prestaciones que les fueron deducidas de sus sueldos (restadas), solicitando así su reembolso, las cuales corresponden a dos ejercicios fiscales 2017 y 2018, razón por la que solo se consideran dichos ejercicios. En este juicio que cada uno de los demandados deberá ofrecer pruebas para acreditar que en ejercicios posteriores se les restaron estos conceptos, porque a cada petición debe recaer un elemento de prueba, por lo tanto, una vez resuelto el incidente de competencia, será determinante analizar nuevamente si los actores ofrecieron más elementos de prueba para exigir este derecho en años subsecuentes y poder así valorar un incremento al pasivo contingente.

**5. Silvestre Raquel Trujillo Santiago**, con base al análisis de las documentales, se hace un cálculo aproximado de **$334,637.00 (Trescientos treinta y cuatro mil, seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)**. El 16 de marzo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, reservándose la Junta su admisión, situación que se notificará posteriormente.

**SUMARIO DE PASIVOS LABORALES**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Monto de litigios** | **$8,844,087.02** |
| * **Litigios en trámite** | **5** |
| * **Concluido** | **0** |

**ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS COSTOS EN PASIVOS CONTINGENTES**

1. Mantener una buena comunicación con el personal académico y administrativo, así como con el sindicato y los trabajadores administrativos de base.
2. Cuando se termina una relación laboral, se protocoliza un convenio ante el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje como autoridad garante de sus derechos y se ofrece un finiquito en términos de la Ley laboral aplicable para evitar demandas.
3. En los juicios en proceso se ha buscado con apoyo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sostener pláticas de carácter concilia de junio de torio y poder terminar los juicios en el menor tiempo posible.
4. Proteger las debidas contrataciones en tiempo y forma.
5. Capacitar al personal directivo para aplicación de sanciones preventivas que permita inhibir conductas contrarias que pongan en riesgo a la institución para ejecutar despidos.

**Otros:** Es importante informar que existen **dos procedimiento**s que no son laborales, siendo estos:

1. **Litis:** Movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica, que desconoce haber efectuado su cuenta de depósito número 65500532580; $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65506546497; $1,075,838.81 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito número 65503681635 y de $99,000.00 (NOVECIENTOS Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65503681345; lo que arroja un gran total a restituir de $1,403,838.81 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.).

**Seguimiento:** Como primera estrategia, se trató de solventar la situación directamente con la Institución Bancaria BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; sin embargo, al no atender esta situación, se solicitó la intervención ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, presentando queja a la cual le recayó el número de expediente 2019/040/12074. El 30 de agosto del 2019, la Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió el DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, reconociendo que Santander permitió que se efectuaran 6 transferencias bancarias indebidas. Tomando en cuenta, que el banco no ha reparado el daño económico, a finales del 2020, se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil con la finalidad de ejecutar este dictamen. Se informa que el día 21 de febrero del 2021 se ingresó electrónicamente la demanda ante el Juzgado en Materia Civil de Cuantía Menor de la CDMX, siendo el 26 del mismo mes y año que desecharon la demanda argumentando incompetencia, acuerdo que a la fecha no ha sido formalmente notificado, dado que para realizarlo las autoridades han informado que se generará cita para tal efecto, manifestando un rezago a causa del COVID-19.

Asimismo, el 14 de noviembre de 2018 la C. Gabriela Guillen Gonzáles, persona que tiene la calidad de persona autorizada para el manejo de las cuentas de ECOSUR, presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) para hacer del conocimiento los hechos antes mencionados a la autoridad competente para que realizaran las investigaciones necesarias en relación con el detrimento patrimonial en contra de ECOSUR, a la cual le recayó el número de carpeta de investigación FED/CAMP/0000514/2018, procedimiento que actualmente se lleva a cabo. Se solicitó la comparecencia del José Armando Alayón Gamboa para la aportación de pruebas y para ratificar la denuncia que en su momento se presentó, llevando a cabo esta diligencia el día 14 de septiembre de 2021 en la Agencia Ministerial Décima Sexta Investigadora UEIDFF, con el acompañamiento de jurídico. Finalmente, se solicitó la comparecencia del Dr. Daniel Guadalupe Pech Pool para la aportación de pruebas y para ratificar la denuncia que en su momento se presentó, llevando a cabo esta diligencia el día 11 de noviembre de 2022. Es importante referir que actualmente el expediente se encuentra en la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México.

1. **Litis:** Incumplimiento al contrato signado el 17 de enero del 2018 para la prestación del servicio de vales de despensa de El Colegio de la Frontera Sur 2018 derivado a la recepción de diversos comunicados vía correo electrónico para reportar que las tarjetas presentaban problemas para efectuar compras.

**Seguimiento:** En este sentido, con fecha 13 de julio del 2018, se notificó a la empresa la rescisión administrativa, para la obtener la devolución de la cantidad de $2,372,850.00 (Dos millones, trescientos setenta y dos mil, ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) , se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil, solicitando además el pago de intereses moratorios; el pago por la cantidad de $691,801.88 (Seiscientos noventa y un mil ochocientos y un pesos 88/100 M.N.) por concepto de pena convencional; y gastos y costas correspondientes al citado juicio. Instancia que concluyó a través de sentencia del 9 de mayo de 2019, sin obtener la restitución de lo demandado.

Cabe señalar que el 15 de mayo del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Circular por la que se comunica a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, Empresas Productivas del Estado, así como a las Entidades Federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa SUVEN, en el sentido de Ordenado en el resolutivo 3º de la resolución administrativa de fecha 8 de abril del 2019, dictada en el expediente número 0002/2018, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción a proveedores iniciado en contra de la empresa SUVEN, S.A. de C.V.

Se ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la República radicándose en la carpeta de investigación número FED/CHIS/SCL/0001720/2020. Actualmente. En atención del requerimiento formulado mediante oficio AYD-SCL-1251/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, se rindió un Dictamen para determinar el daño económico resentido en este asunto. De acuerdo con el Dictamen de fecha 12 de enero de 2021, emitido por el Representante Legal de Contaduría Soto Prieto y Cía., S.C., se advierte un monto a indemnizar por $2,372,850.29 (Dos millones, trescientos setenta y dos mil, ochocientos cincuenta pesos 29/100 M.N.). Se tiene información que el expediente se encuentra asignado a otro Agente Ministerial.

Con fecha 24 de mayo de 2022, mediante oficio SCL-EIL-CIV-C1-394/2022 emitido en esta carpeta de investigación, se notificó el ejercicio de la no acción penal. Derivado de ello, el 8 de junio de 2022, se interpuso recurso en contra de esta determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas con Residencia en Cintalapa de Figueroa, el cual fue acordado de recibido el 09 de junio de 2022.